

"Me siento responsable de haber tomado la decisión de participar en una misión de paz en Bosnia y, por consiguiente, también de sus consecuencias". El presidente del Gobierno, Felipe González, asumió con esta declaración, efectuada

poco después de visitar la capilla ardiente del teniente Arturo Muñoz, la responsabilidad política máxima del trágico desenlace de las heridas sufridas en Mostar por el oficial de la "Agrupación Canarias". González evocó la tristeza con que

sus compañeros del batallón español desplazados en la antigua Yugoslavia recibieron la noticia, aunque subrayó la comprensión mostrada y resaltó que continúan con "una gran moral y sin variar en absoluto su actitud".

González: "Soy responsable del envío de tropas a Bosnia y, por tanto, también de sus consecuencias"

García Vargas es partidario de enviar más soldados, hasta que prospere el plan de paz

RAFAEL HERRERO. COLPISA
MADRID

González reconoció el duro varapalo sufrido durante el "jueves negro", cuando se conocieron diversos indicadores y noticias económicas de tinte pesimista, aunque precisó que "sin duda, la más dura de todas ellas fue el fallecimiento del teniente Muñoz". Para el jefe del Gobierno, el trabajo que desarrollaba el militar español cuando resultó herido de gravedad por una granada, se ha convertido en un "símbolo" de los esfuerzos de paz. "Entregó su vida -manifestó- cuando portaba ayuda humanitaria" para otras víctimas del conflicto en la antigua Yugoslavia.

Según González, las tropas españolas desplegadas en la zona continúan desarrollando su misión con precaución y profesionalidad, "pero es imposible que el riesgo desaparezca".

A pesar de ello, precisó que se intentará minimizar en lo posible con nuevas medidas de protección y seguridad que se están desarrollando en las últimas jornadas, cuando los "cascos azules" españoles han asumido labores más arriesgadas.

"PUEDEN HABER MAS BAJAS"

Por su parte, el titular de Defensa, Julián García Vargas, declaró poco antes de celebrarse el funeral que, "lamentablemente, no se puede descartar que en las próximas semanas se produzcan nuevas bajas" entre los militares españoles. Después de la ceremonia, Vargas manifestó que "se puede decir, con gran pesar, que hemos entrado en la normalidad



El féretro es llevado a hombros por tenientes de la promoción del finado y escoltado por gastadores legionarios. (EFE)

de una misión de paz de estas características". "Hasta ahora -admitió- parecía que había un halo protector, que desafortunadamente se ha roto".

Vargas recordó como, desde meses atrás, venía reiterando los riesgos que se asumían con esta misión, aunque la fortuna parecía acompañar al batallón español. El ministro insistió en que "estos accidentes mortales se pueden repetir, aunque trataremos de disminuir los riesgos, pero no podemos rehuir nuestra misión".

Vargas expresó que, en la situación actual, el Gobierno español es partidario de aumentar

el número de "cascos azules" desplegados en la zona del conflicto, en tanto que no prospere definitivamente la aplicación del plan de paz Vance-Owen. A su juicio, los cinco mil "cascos azules" que se encuentran en la antigua Yugoslavia no son suficientes para garantizar que se respeten las zonas de seguridad implantadas y abogó por una solución provisional hasta que el plan de paz entre en vigor. "En esta situación transitoria -dijo- se deben enviar más tropas, un número intermedio entre los cinco mil efectivos actuales y los cincuenta mil que tenía previsto

desplegar la OTAN si se aplicara el plan de paz".

Este aumento de fuerzas, según Vargas, debe ser asumido por otros países que hasta el momento no participan en misiones de ayuda humanitaria, aunque no descartó que durante este fin de semana el Gobierno decida el envío de nuevos soldados españoles como refuerzo. Además, anunció que en las próximas horas está previsto que se traslade hasta el Mar Adriático una nueva fragata española, con el fin de reforzar las medidas de presión y bloqueo sobre los serbios bosnios.

Funeral por la primera víctima de los "cascos azules" españoles enviados a la antigua Yugoslavia

RAFAEL HERRERO. COLPISA
MADRID

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, acompañado de los ministros de Defensa, Julián García Vargas, y de Asuntos Exteriores, Javier Solana, presidió al mediodía de ayer en el patio de armas del Cuartel General del Ejército el funeral "corpore insepulto" por el teniente legionario Arturo Muñoz Castellanos, de 28 años, la primera víctima de los "cascos azules" españoles desplazados a la antigua Yugoslavia.

El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y el presidente del Gobierno, Felipe González, se desplazaron previamente, a primeras horas de la mañana, hasta la sede del Cuartel General del Ejército para visitar la capilla ardiente del militar fallecido y expresar su pésame a los familiares.

La emotiva ceremonia, además de su carácter religioso, se convirtió en un homenaje de las Fuerzas Armadas, el Gobierno y todas las fuerzas políticas a la labor humanitaria desarrollada por el joven teniente fallecido, símbolo de la elogiada misión que desarrollan los "cascos azules" españoles en Bosnia-Herzegovina. Narcís Serra, en representación del Ejecutivo, impulsó en la enseña española que cubría el féretro la medalla al mérito militar, condecoración a título póstumo concedida al teniente fallecido.

La capilla ardiente de Arturo Muñoz fue instalada a las 9.30 horas en el Cuartel General del Ejército, donde el féretro fue velado por cuatro tenientes de la Legión, de Transmisiones, de Caballería y de la Brigada Paracaidista, las cuatro unidades que componen el batallón español desplazado en Bosnia.

L.F. RODRIGUEZ GUERRERO. COLPISA
MADRID

El fiscal Antonio Salinas, encargado del "caso Filesa", pidió ayer al magistrado instructor de la causa, Marino Barbero, que suspenda la ratificación por parte de los peritos de su informe, prevista para el próximo 3 de junio, porque considera que esta no es una medida "ni urgente ni imprescindible". Si el magistrado Barbero rechaza esta petición, será la Sala Segunda del Tribunal Supremo la encargada de resolver el recurso, así como el presentado por las defensas de los implicados.

El fiscal Salinas presentó además ante la sala el informe sobre competencia aprobado el jueves por la Junta de Fiscales de Sala a pesar de las reticencias iniciales del fiscal general del Estado, Eligio Hernández. En el escrito reco-

El fiscal del "caso Filesa" pide al juez Barbero que suspenda la ratificación del informe pericial

noce que el parlamentario catalán y dirigente del PSC-PSOE José María Sala puede estar implicado en los hechos investigados, que tuvieron lugar fuera del territorio de la comunidad autónoma de Cataluña y que no califica como delictivos, pero que de ser investigados, tienen que serlo por el Tribunal Supremo.

RECURRIR LA DECISION

La Sección Penal de la Fiscalía General del Estado -compuesta por todos los fiscales que ejercen su función ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo- acordó

El informe fiscal sobre competencia reconoce que José María Sala pudo estar implicado, pero no le imputa delito alguno

ayer por unanimidad recurrir la decisión del magistrado Barbero de citar a los peritos el próximo 3 de junio, tres días antes de las elecciones generales, para que ratifiquen el informe elaborado

sobre la trama empresarial creada en torno a Filesa, en el que constatan numerosas irregularidades que pudieran ser delictivas que afectan a los cuatro querellados y llegan incluso al propio Partido Socialista Obrero Español.

Entre los fiscales no hubo dudas de que esta diligencia "no es urgente" y, por lo tanto, el instructor de la causa no debería haberla adoptado.

El debate se centró en la conveniencia de recurrir directamente la medida o si, por el contrario, era preferible esperar y simplemente apoyar los recursos presentados por las defensas de los

querellados. Al final, la postura compartida por todos los asistentes fue presentar ante el magistrado Barbero un recurso propio, con el fin de que el fiscal Salinas pueda defender "sus propios argumentos, y no los que utilicen las defensas", en palabras de uno de los asistentes a la reunión. Esta argumentación insiste en que el instructor ha sobrepasado las facultades que le fueron concedidas por la Sala Segunda del Supremo, ya que la ratificación del informe pericial no es una medida "ni urgente ni inaplazable", por lo que debe suspender su realización.

Los recursos presentados por las defensas de los querellados comparten esta misma tesis, pero aducen también que es una medida de gran trascendencia política dada la cercanía de las elecciones generales.